

N.º 409
12 de noviembre
2025
Apoyo:
1,5 € - 2 €

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

REDACCIÓN
y ADMINISTRACIÓN:
C/ Desengaño 12, 1º3-A
28004 Madrid
TEL: 91 522 23 56
io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Movilizaciones: metalúrgicos de Barcelona, Ciudad Real, empleados públicos, Valencia, Andalucía.



"Parálisis institucional"
Es necesario un giro a la izquierda

CONTINUA LA
CRISIS EN VALENCIA
página 2



SANIDAD: ANDALUCÍA,
VALENCIA, CATALUÑA
página 4



VICTORIA DE MAMDANI
NUEVA YORK
página 11



MANIFESTACIONES
PALESTINA 29 N
página 6



EDITORIAL

Una crisis de Estado

El Juliana escribía en La Vanguardia del pasado 4 de noviembre lo siguiente: «El drama de Valencia ha significado una verdadera crisis de Estado, una de esas crisis que perforan el músculo social y trastocan su relación con la política y las instituciones. Paiporta, 3 de noviembre de 2024. No olvidemos esta fecha. Los reyes, el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat Valenciana, [...] abucheados por la gente...» Nos hemos permitido iniciar este editorial con esta larga cita porque resume, en manos de un defensor autorizado del régimen, la situación. Lo ocurrido en el funeral de Estado confirma esta impresión.

En efecto, son las vergüenzas de todo el entramado institucional del Estado las que han sido puestas en evidencia. Es el carácter parasitario de todas las instituciones de la Monarquía heredera del franquismo el que hace aguas y se muestra impotente y enfrentado ante las catástrofes de repetición, de la dana a los incendios. En cada uno de ellos se pone de manifiesto la improvisión de las autoridades, la falta de reacción, la extrema precariedad del personal que debería actuar, los recortes que han impedido aplicar medidas necesarias...

Pero no se trata solo de las catástrofes «naturales». También están las catástrofes sociales: el aumento de la precariedad laboral (47,5% de los trabajadores según el reciente estudio de Cáritas), la juventud condenada a no poder emanciparse, entre otras cosas por la inaccesibilidad de la vivienda y los bajos salarios y que, desesperada, se refugia de manera preocupante en la abstención y la extrema derecha. No para todos es catastrófica la situación.

Mientras buena parte de la población trabajadora sufre privaciones para llegar a fin de mes, la banca, las empresas energéticas, las multinacionales del comercio, de la agroindustria obtienen beneficios espectaculares. El IBEX 35 alcanza la cifra récord de 16.000 puntos.

Los comentaristas económicos se lamentan de que la clase media desaparece y la división de clase entre grandes capitalistas y poseedores por un lado y trabajadores asalariados o autónomos se acrecienta. Oxfam explicaba en su informe anual que «para los 30.000 millones españoles, 2024 también fue un gran año. Su riqueza conjunta superó los 185.000 millones de euros, aumentando más de un 20% respecto al año pasado». A la luz de estos datos, ¿quién puede aún negar que la lucha de clases existe y que las políticas identitarias, al margen de las voluntades de quienes las defienden, no pueden encubrir esta realidad.

El capital y quienes lo defienden (sin excluir a los economistas y periodistas asemejados), la patronal y sus instituciones, tienen una política clara: bajar lo máximo posible el costo de la fuerza del trabajo, ya sea el salario directo o el diferido. Claman al cielo cuando los sindicatos del metal piden aumentos según el IPC más un punto para paliar la pérdida del poder adquisitivo. La campaña contra el sistema de pensiones se acrecienta cuando estos años se ha conseguido como mínimo no perder más poder adquisitivo, incluso se lanza una campaña que pretende culpar a los viejos por los bajos salarios de los jóvenes. Es la realidad de la lucha de clases, para muchos luchadores la cuestión central está en cómo actúan y deben actuar las organizaciones que construyeron, y reconstruyeron a la muerte de Franco, los trabajadores para defender sus intereses y reivindicaciones, la democracia y los derechos de los pueblos. Son muchos los que piensan que estas organizaciones no se enfrentan claramente a los intereses voraces del capital, que se contentan muchas veces con medidas paliativas o insuficientes, que les tiembla la mano a la hora de enfrentarse con el Gobierno.

En cuanto al Gobierno, frente a las enormes necesidades de nuestra sanidad, de la enseñanza, de las universidades que van a la huelga por falta de fondos que necesitan para sobrevivir, de la falta acuciante de viviendas públicas, del estado penoso de muchas carreteras, de los empleados públicos sin subida salarial ya casi terminando el año, de la falta de infraestructuras hidráulicas (Barranco del Poyo), cada vez es más incomprensible que priorice el aumento del gasto militar para contentar a Trump (y más cuando Trump empieza a conocer la reacción de masas, en los propios EEUU, a su política antiobrera).

No hay vuelta de hoja, la crisis de Estado no se resuelve abdando la Monarquía y manteniendo este régimen. Esta política solo lleva a abrir el camino a las derechas. O se produce un giro a la izquierda atendiendo a las reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos, o se está alimentando la victoria de la reacción.

Mazón no ha dimitido. ¡Lo hemos echado!

Ha hecho falta un año de movilizaciones masivas del pueblo valenciano y la constitución de organizaciones como la Plataforma Mazón Dimisión, de asociaciones de víctimas, de comités locales de reconstrucción y del Acuerdo Social Valenciano para echarlo. Se fue indignamente, se fue repudiado por las masas por asesino, por mentiroso, por su bajeza moral y personal.

Todos comprendieron de inmediato que las consecuencias de la catástrofe meteorológica tenían responsables políticos y que la ira del pueblo también tendría consecuencias políticas indeseables para la estabilidad institucional. Las institucio-

ción», pero su pretensión era frenar todo lo posible la movilización, calmar los ánimos para defender a la institución que tenía ese 29 de octubre la responsabilidad y la capacidad para salvar cientos de vidas: la Generalitat Valenciana y en primer lugar su presidente.

El inicio de la crisis

La opinión del pueblo valenciano y de cuantos se identificaban con él en todo el Estado, la expresó el 3 de noviembre de 2024 el pueblo de Paiporta. El rey, desoyendo todas las recomendaciones del Gobierno central y del de la Generalitat, quiso presentarse allí acompañado del presi-

mas. La farsa tuvo la respuesta que se merecía. Felipe VI tuvo que marcharse manchado de barro, entre gritos de [asesinos, asesinos!], sin poder entrar a la localidad devastada. Sonaron todas las alarmas: la Monarquía era cuestionada abiertamente a ojos de todos.

Seis días después, el 9 de noviembre, en Valencia, a la convocatoria de la Plataforma Mazón Dimisión respondían más de 150.000 ciudadanos reclamando la dimisión y el encarcelamiento de Mazón. Este, sintiéndose impune y suficientemente arropado, sabiendo que su continuidad en el cargo no depende (en general, ni en

ciudadanos salieron a la calle pidieron el encarcelamiento de Mazón y su dimisión.

Estalla la crisis

Cuatro días después, el 29 de octubre, se organiza un funeral de Estado por las víctimas. Mazón acude y allí estalla la crisis sin control. Las víctimas llevan días exigiendo que Mazón no aparezca por el funeral. Esa mañana, Mazón comparece en el Palau de la Generalitat rodeado de su camarilla y otros altos cargos institucionales para recibir un caloroso aplauso, declara el 29 de octubre «Día oficial del recuerdo a las víctimas de la dana». Era echar leña al fuego.

La dignidad de las víctimas y su valentía al increpar e insultar a Mazón al comienzo del funeral revienta todas las compondiendas: algunas familias se negaron incluso a ir al funeral. Las víctimas, las que fueron al funeral y las que no, al negarse a acompañar esta nueva faraónica oficial, hicieron que todas las instituciones, incluido el Borbón, sintieran el aliento de su indignación y de su rabia en el cogote. Era urgente actuar, mantener a Mazón ponía todo el entramado institucional en peligro. Desde el inicio se trataba de una crisis de Estado que ya venía incubándose.

El 3 de noviembre, en un discurso indigno en el que no reconoce ninguna responsabilidad, anuncia su dimisión. Miles de personas celebraron esa misma tarde su dimisión frente al Palau de la Generalitat.

¿Y ahora?

La crisis sigue abierta: Mazón no ha dimitido, ha sido la acción de masas la que lo ha echado. Los analistas más conscientes lo advierten: las espaldas siguen en alto, hay que medir los pasos, la situación presenta riesgos. Para quienes defienden las instituciones el peligro es la movilización, las exigencias del pueblo, las reivindicaciones de los damnificados. Y la voluntad de continuar la movilización para exigir responsabilidades y ver satisfechas las reivindicaciones (que incluyen la retirada de todos los recortes hechos por

Mazón), la búsqueda de las formas de ampliar la organización desde abajo existe: ver el manifiesto del ASV en las páginas centrales de este n.º de Información Obrera. La «dimisión» de Mazón no ha cerrado la crisis (llega tarde, demasiado tarde; pero es que el presidente ha tenido todos los apoyos institucionales que necesitaba para mantenerse y, por supuesto, los de Vox y los del PP). Tampoco va a cerrar la crisis una pantomima de reconstrucción, una reconstrucción de cartón piedra.

En el momento de escribir este artículo, se enfrentan dos posiciones:

- Del PP y Vox: dar continuidad a las Cortes Valencianas y a un gobierno surgido de ellas, pero decidido por las direcciones estatales del PP y Vox. Supone dar continuidad y agravar una política de recortes sociales y democráticos, y a unas Cortes que no representan ni a una pequeña parte del pueblo valenciano.

- La de convocar unas elecciones anticipadas, defendida por todos los partidos de la oposición, y que la mayoría de los valencianos desean para terminar con un Consell criminal compuesto por franquistas y unas Cortes con mayoría de franquistas.

Sin embargo, unas elecciones, en sí mismas, no resolverían el problema. Es necesario que la movilización continúe, pero esto tampoco es suficiente por sí mismo.

Este año han surgido, producto de la indignación del pueblo, comités, organizaciones que formulan de forma clara las reivindicaciones; no habrá solución sin la organización de los trabajadores y del pueblo, organismos que se enfrentan al entramado institucional prisionero de la Monarquía, que plantean otro gobierno, otras instituciones del pueblo y para el pueblo.

7 de noviembre de 2025
Blas Ortega



nes que han abandonado al pueblo durante décadas lo hicieron también los días de la dana y lo han continuado haciendo después. Los dirigentes políticos y sociales maniobraron apelando a la «unidad para la reconstrucción».

Pedro Sánchez y de Mazón. Pretendía calmar los ánimos, dar esperanza a quienes lo habían perdido todo, y hacer ver que, si otros les habían fallado, la Corona no, el rey y toda su familia estaban con las vícti-

mas (momento) de la voluntad del pueblo, no dimitió, ni tuvo intención de hacerlo en ningún momento. Tras once manifestaciones multitudinarias y un año después, el 25 de octubre de 2025, de nuevo 150.000

El testimonio de las víctimas de la dana en el Congreso

La comisión de investigación del Congreso sobre la dana citó a declarar a las asociaciones de víctimas. Las comparecencias duraron tres días: 4, 5 y 6 de noviembre. Con un formato que no es el habitual, los familiares de las víctimas tuvieron 15 minutos para dar testimonio de lo sucedido.

Rosa Álvarez



La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, que vive en Catarroja y perdió a su padre, inició las comparecencias.

En su intervención ante los parlamentarios que la escuchaban, Rosa hizo un relato desgarrador, recordó a su padre, la última conversación que mantuvo por teléfono con él momentos antes de que se ahogara en su casa, recordó a todos las víctimas.

Ese mismo día había dimitido Mazón. Rosa se felicitó de que ya no pudiese representar al pueblo valenciano, dijo que su dimisión era un alivio moral y una victoria del pueblo que durante un año se había movilizado para echarlo, que ahora la lucha continúa para que Carlos Mazón fuera a prisión. Reprochó a todos los que apoyaron y sostuvieron a Mazón en la Presidencia de la Generalitat y, sin citarlos, a Gan Pampols, quien dijo que los fallecidos no habían sabido salvarse, que ellos eran los responsables de su propia muerte. ¡No cabe más humanidad y desvergüenza!

Con claridad expuso lo que todos sabemos: a las 229 víctimas no las mató el clima, sino la incompetencia y la irresponsabilidad de unos gestores y de unos políticos que debían y tenían los medios para protegerlos y no lo hicieron. Enviraron tarde una alerta que habría salvado muchas vidas, y ni tan siquiera han pedido perdón. A las 9:00

se conocieron las primeras muertes y les siguieron muchas más porque nadie les avisó.

Se preguntó cuántas veces tenía que morir su padre y el resto de las víctimas para que reconozcan su responsabilidad en ello. Afirmó que hay que seguir luchando contra la impunidad, y que lo que uno solo no puede conseguir, el pueblo sí puede conseguirlo.

Alex Carbajal:



Álex, de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, bombero del ayun-

tamiento de Valencia, vive en Massanassa.

Expuso que se asumieron responsabilidades y reclamó medidas para el futuro.

Declaró: «La falta de coordinación hizo que los cuerpos de seguridad y de emergencias de la ciudad de Valencia, a unos 10 kilómetros de la zona cero, se quedaran en sus cuarteles. Estuvimos cinco días solos en Massanassa.

Me preguntan qué habíamos necesitado: hospitales de campaña, militares, policías, no vimos nada, no había nadie. Estamos a siete minutos en coche de Valencia, no en una aldea lejana.

No entendíamos nada». Afirmó no haber visto nada parecido en su vida. «Todos tenemos lagunas de esos días en cuanto a horarios y a hechos. Es imposible que se sepa cuánta gente se ha podido rescatar esos días, personas que estaban a punto de ahogarse desde las ventanas, pero esa cifra tiene que ser grande.»

Informaciones recogidas por B. O.

Extractos de 9 de noviembre de los CLERC

Por su interés publicamos el final de la resolución que puedes ver completa en nuestra página Web

Desde los Comités Locales reclamamos y exigimos una reconstrucción para la vida frente al capital. Reclamamos el fin de las políticas de Mazón.

Reclamamos tener voz propia, donde la soberanía popular decide dónde, cuándo y cómo se tienen que reconstruir nuestros barrios, pueblos y comarcas. Ahora es la hora de no parar: . Martes 11 de noviembre a las 15.30h nos concentraremos ante las Cortes coincidiendo con la declaración en la comisión de investigación de la DANA de Carlos Mazón.

-. Lunes 17 de noviembre estaremos también en Madrid, ante la declaración de Carlos Mazón en la comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados y el 29 de noviembre, volveremos a salir a las calles en una manifestación multitudinaria para gritar muy fuerte:

¡¡Verdad, justicia y reconstrucción social!!!

Huelga sector del metal de Barcelona



Tras varias décadas UGT y CC.OO. convocaron dos días de huelga, desde la noche del 29 hasta el día 30, por mejoras salariales en el convenio del metal de Barcelona.

La huelga y movilizaciones sin duda han sido seguidas por una gran mayoría de los más de 180.000 trabajadores y trabajadoras afectados en particular en las empresas grandes y medianas.

Empresas como la planta de automóviles de Ebro (filial de la China Chery), Seat, y otras empresas como La Farga, Ficosa, Gestamp, Mecalux pararon toda la producción, no se llegó a entrar.

Así lo declaraba la secretaria general de UGT-Fica de Catalunya, Antonia Fuentes, como el secretario general de CC.OO. Industria de Catalunya, Josep Rueda, que han asegurado que esta segunda jornada de huelga ha sido un «éxito», defendido que los sindicatos están en una posición de fuerza tras las movilizaciones y han alertado: «Noviembre va a venir calentito si la patronal no se sienta y somos capaces de flexibilizar todos y todas nuestra postura».

Corresponsal

También han contado con un gran seguimiento las movilizaciones, tanto las realizadas frente a la sede de Foment de Treball como la manifestación que recorrió las vías importantes de la capital catalana.

Las reivindicaciones de los sindicatos convocantes pasan por no sufrir un retroceso en los derechos laborales conquistados, ya que la patronal pretende volver a aplicar la compensación y absorción de los aumentos salariales. La exigencia de una subida salarial que garante la subida del IPC y les permita mantener el poder adquisitivo, así como medidas para rebajar la siniestralidad laboral y desarrollar las políticas de igualdad.

Asimismo, reclaman que el acuerdo contemple mecanismos de control efectivos que aseguren el cumplimiento de las mejoras pactadas y eviten interpretaciones unilaterales por parte de las empresas.

CC.OO. y UGT anuncian nuevas movilizaciones si la patronal sigue negándose siquiera a sentarse a negociar.

Corresponsal

Regulación por ley del IPC real

El Congreso de CCOO Industria debatió una enmienda a la ponencia confederal para exigir al Gobierno que regule por ley que los salarios se actualicen como mínimo con el IPC anual

En el 3.º Congreso de la Federación Estatal de CCOO Industria, celebrado los días 22, 23 y 24 de abril de 2025 en Toledo, se debatió una enmienda a la ponencia confederal que planteaba que el sindicato debe exigir al Gobierno que regule por ley que todos los salarios deben actualizarse como mínimo con la subida del IPC. Esta enmienda venía como minoritaria del Congreso de CCOO Industria Madrid, y había sido presentada en la comarca sur de Madrid y en la sección sindical de CCOO en John Deere.

La enmienda no salió aprobada y por lo tanto no fue discutida en el 13.º Congreso Confederal. Uno de los argumentos que se dio para rechazar la enmienda es que interfiere y ponía en cuestión la negociación colectiva entre los sindicatos y las patronales al dejar definida una materia tan importante como la subida salarial en manos de una legislación dictada por el Gobierno y aprobada en el Congreso de los Diputados.

En realidad, la motivación de la enmienda es la de poner los medios para que el Gobierno garantice el poder adquisitivo de los salarios, de manera que la representación legal de los trabajadores y los sindicatos tengan un sueldo asegurado a cara de tigre en los convenios y en la negociación colectiva se puedan disputar y conseguir, frente a las patronales, mejoras reales de aumentos de salario por encima del IPC u otras mejoras en sus condiciones laborales, al tener la obligación legal los empresarios de asegurar que los salarios se actualizan con el IPC. Al ser una cuestión tan importante para las personas trabajadoras y haber sufrido

de una forma tan brutal los efectos de la subida de la inflación, el aumento del coste de la cesta básica de la compra, de la vivienda, que son incluso muy superiores al mero índice de precios al consumo, se ha producido un recorte extraordinario del poder adquisitivo. Se trata por tanto de exigir una legislación que impida que siga produciéndose esta situación. Del mismo modo que se consiguió con la ley 21/2021 que el Gobierno actualice las pensiones con el IPC cada año.

Al igual que se han establecido en el Estatuto de los Trabajadores otras consideraciones que son derecho y al que se acogen todas las personas asalariadas y que luego pueden ser mejoradas en la negociación colectiva. Por ejemplo, sobre los permisos retribuidos existe una regulación y derecho establecido para cada persona trabajadora, y no se tiene que discutir y negociar desde cero en cada empresa cuántos días de permiso corresponda grado, den por la operación de un familiar de primer grado.

La recuperación salarial, prioridad de la negociación colectiva

El párrafo 185 de la ponencia Confederal, pag. 40, decía lo siguiente: «La gran reversión, la pandemia originada por el COVID y la crisis inflacionaria limitaron la negociación colectiva. En términos económicos, han supuesto una importante divergencia entre los incrementos salariales pactados y la escalada de los precios que ha contribuido a una significativa pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, frente a un elevado aumento de los márgenes de be-

neficios empresariales, que ha sido el factor determinante del efecto inflacionista de segunda ronda que volvió a impulsar la espiral de precios».

La enmienda presentada pretendía anadir al final del anterior párrafo lo siguiente:

«Es por eso que el sindicato defenderá ante el Gobierno que decrete por ley que todos los salarios de las personas trabajadoras de las empresas y de la administración pública deben actualizarse anualmente de forma automática, como mínimo con el IPC publicado por el INE en diciembre de cada año. Con independencia y además de los incrementos o mejoras adicionales al IPC que se negocien en cada lugar, para mejorar el poder



adquisitivo o participar de los incrementos de beneficios y productividad de las empresas».

Pablo García Cano, Delegado en el Congreso de CCOO Industria

En el mes de noviembre, los empleados públicos siguen sin subida salarial



la mañana, 14.500 millones para gasto militar. Sin duda Trump pesa más en sus conciencias que los empleados que sostienen la sanidad, la enseñanza, que apagan los incendios, que recogen la basura, que vigilan los barrios...

Tampoco ha cumplido el Gobierno lo firmado en 2022, pomposamente llamado «Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI», que se comprometía a aplicar a lo largo del año 2023 la clasificación profesional prevista en el artículo 77 del Estatuto Básico del Empleado Público (lo que hubiera supuesto reclasificar en el grupo B a los técnicos superiores y en el C1 a los técnicos, con una importante subida salarial), y a anular la supresión de la jubilación parcial anticipada y extenderla al personal estatutario de la sanidad.

Recordemos que, a pesar de las subidas salariales incluidas en ese acuerdo, este colectivo de trabajadores ha perdido entre el 5,8% y el 7% de su capacidad adquisitiva desde 2022, mientras que la cifra global desde los recortes de 2010 puede superar el 20%.

El 30 de octubre, los sindicatos UGT,

CSIF y CCOO han iniciado las primeras movilizaciones, de forma más bien modesta, con unas concentraciones de delegados en horario de mañana. Han anunciado la posibilidad de una huelga en diciembre. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido citando a los sindicatos para el 5 de noviembre, para abrir negociaciones. O para marear la perdiz, diría algunos mal intencionados, o quemados por la experiencia de otras veces.

¿Podrá el Gobierno conjuntar sus compromisos de aumentar el gasto militar con la subida salarial que los empleados públicos reclaman? ¿Y con la necesaria recuperación del poder adquisitivo perdido, porque no basta con subir un 3% ahora? ¿Y con la reclasificación firmada en el acuerdo de 2022? No son pocos los que lo dudan. En todo caso, cualquier avance, por mínimo que sea, en ese sentido, va a exigir una importante presión y movilización sindical, que los sindicatos deberían preparar desde ya con notas informativas, asambleas y acciones en los centros.

Luis González

ÚLTIMA HORA, el Gobierno cita a los sindicatos, que suspenden las movilizaciones

El 5 de noviembre, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, y la directora general, María Hilda Jiménez, se han reunido con los sindicatos «para retomar las negociaciones sobre empleo público». Se ha acordado un calendario de reuniones semanales para trabajar sobre dos bloques: empleo público, que será el primero de los asuntos que se aborde, y sobre salarios (a partir del 19 de noviembre). El ministerio propone un nuevo acuerdo plurianual (2026-2028), plasmado en un texto que pueda ser llevado a la Mesa General

de Negociación de las Administraciones Públicas, y que puede incluir una subida salarial por encima del IPC y que se habla sobre fondos adicionales, recuperación del empleo perdido, culminación de los procesos de estabilización, rejuvenecimiento de las plantillas, así como recuperar los recortes de los años 2010-2012.

Según CSIF, el texto incluirá de forma «claramente diferenciada» la subida que se establezca para 2025.

Aún así, señala CCOO, aún quedan pendientes por cerrar materias del ya caducado Acuerdo

Marco para una Administración del Siglo XXI, como la jubilación parcial del personal laboral, funcional y estatutario, la clasificación profesional conforme al Sistema Español de Cualificaciones Profesionales, la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o la situación del Servicio Exterior.

CCOO añade que «de no materializarse nuestros objetivos o de que los resultados sean insuficientes, retomaríamos la senda de las movilizaciones, que, de momento, han quedado suspendidas».

Corresponsal

El BNG pide en el Congreso blindar por ley la subida salarial de los funcionarios con el IPC

Propone asegurar la revalorización automática de salarios de funcionarios según el IPC para recuperar su poder adquisitivo perdido



to actual. Néstor Rego, diputado del BNG, ha subrayado que esta situación «sería dificultosa» para muchos trabajadores del sector público, afectando su capacidad para enfrentar los costos de vivienda, alimentación y otros suministros esenciales.

Rego también ha destacado un dato preocupante: algunos salarios en cueros y escalas básicas de la administración se están equiparando prácticamente con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este hecho, en su opinión, ilustra «el nivel de deterioro retroativo del personal público».

En respuesta a esto, el BNG insta al Gobierno a emprender acciones necesarias para establecer una cláusula de garantía salarial. Esta cláusula permitiría que los salarios de los empleados públicos se actualicen automáticamente cada año conforme al incremento real del IPC.

El objetivo de esta medida es articular acuerdos salariales futuros, bien sean anuales o plurianuales, que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.

El BNG también sugiere que esta subida automática sea independiente y complementaria de cualquier incremento salarial negociado colectivamente que pueda surgir en el ámbito de la negociación colectiva.

Corresponsal

A primeros de octubre el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha puesto en marcha una iniciativa que busca asegurar legalmente la revalorización de los salarios de los funcionarios conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). La propuesta, presentada formalmente como una proposición no de ley en la Comisión de Hacienda del Congreso, pretende garantizar que los salarios del personal público se ajusten automáticamente en relación al costo de vida.

Desde el año 2010, los funcionarios han experimentado una pérdida progresiva de su poder adquisitivo que, según el BNG, ya supera el 20% en el contexto

Cribados de cáncer: lo que ha aparecido por el momento es la punta del iceberg

En Andalucía se ha destapado un escándalo con respecto a los cribados de cáncer de mama: no se cumplió el protocolo que obligaba a que en el caso de mamografías

miento de la sanidad pública, de los recortes de presupuesto y la falta de personal. El gobierno andaluz ha respondido al desastre y a las poderosas movilizaciones

cáncer de cérvix (citológicas), el de colon (pruebas de sangre oculta en heces) y el de próstata (pruebas de PSA).

Una paciente nos relataba cómo, tras detectárselle sangre en heces, pidió cita para colonoscopia y se la dieron ¡para dos años! (naturalmente, se fue a una privada).

El Servicio Andaluz de Salud no publica tiempos de demora para pruebas diagnósticas y ha ordenado un muro de silencio sobre las demoras de cita para pruebas relacionadas con estos cánceres.

La ministra de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que faciliten datos sobre cribado de cánceres de mama. Una buena idea. Pero no suficiente. La sanidad pública está infrafinanciada en todas las autonomías, y no se ha recuperado de los terribles recortes que sufrió entre 2010 y 2018.

El Gobierno, que tan fácilmente ha encontrado en abril de 2023 10 500 millones para gasto militar extraordinario, bien podría encontrar dinero para unas transferencias extraordinarias para los programas de cribado de cánceres. Las vidas de las mujeres deberían valer más que los mandatos de Trump.

Luis González



con imágenes no concluyentes, se informara a las mujeres afectadas y se les citara para nuevas pruebas. No hacerlo ha puesto en peligro a miles de mujeres, y algunas de ellas han desarrollado tumores muy avanzados y más difíciles de tratar.

Es el resultado del desmantela-

que ha provocado con un «plan de choque» y con contrataciones de urgencia. Pero taponar una vía de agua no basta para mantener a flote un barco que se hunde, como la sanidad andaluza.

El cáncer de mama no es el único que tiene un plan preventivo de cribado. Los tienen también el

de la sanidad pública, de las

Cataluña: Congela la ampliación de cribados de cáncer de mama y de colon por falta de presupuestos y profesionales

La Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decidido por falta de presupuesto económico, así como por falta de profesionales, suspender la ampliación del plan de prevención de cribados para el cáncer de colon y de mama previsto para el año 2026.

Actualmente las mamografías preventivas se realizan cada 24 meses a mujeres de entre 50 y 69 años.



El Pla Director d'Oncologia de la Conselleria de Salut había aprobado extender la franja de edad a partir de este año, de los 45 a los 74 años,

siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.

Así como también preveía ampliar el cribado de colon, que se realiza mediante un test de sangre oculta en heces, hasta los 74 años, pero según la propia Conselleria tanto el incremento de población a atender como la falta de recursos económicos y humanos han obligado a posponerlo.

La negativa a entregar los informes requeridos por el Ministerio de Madrid, y tras lo ocurrido en particular en Andalucía, pone en alerta la gestión de la Seguridad Social que en muchos de sus servicios ha sido privatizada. Para salir al paso, el Govern de Cataluña ha informado de la situación, manifestando que no es el mismo problema, o como manifiesta la propia Asociación Española Contra el Cáncer: «No se han registrado fallos en los cribados de mamografías como los detectados en otras comunidades».

Pero no es nada tranquilizador lo que anuncia el presidente de la Sociedad Catalana de Radiología y Diagnóstico por Imagen de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, Salvador Pedraza: «La ampliación llegará; solo necesitamos tiempo y refuerzos profesionales». ¿Tiempo y refuerzos profesionales? ¡Como si no nos fuera la vida en ello!

Eva Clara

Sanidad pública en Valencia: Es necesario levantar un movimiento en defensa de la sanidad pública, basado en las necesidades de pacientes y profesionales

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano, en la que se integran la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública y los sindicatos de UGT y CC. OO., ha convocado una concentración el 8 de noviembre en Valencia «por la sanidad pública». Su objetivo es «visibilizar la grave situación que atraviesa el sistema sanitario público y exigir a las administraciones autonómicas responsables medidas urgentes para garantizar el derecho a la protección de la salud».

No cabe duda de que en el País Valenciano es necesario levantar una potente plataforma ciudadana, que incluya a las organizaciones, para organizar la movilización contra el desmantelamiento de la sanidad, una de las mayores conquistas de la población trabajadora. Pero, si se quiere que esa plataforma asocie masivamente, como en Madrid o Andalucía, es imprescindible partir de las reivindicaciones reales de personal de la sanidad y de los ciudadanos. El manifiesto de convocatoria habla de «promover hospitales a pleno rendimiento».

Pero no es posible aumentar el rendimiento de los centros sanitarios cuando los trabajadores de la sanidad están agotados y desmotivados, terminan el año con tantas horas de más trabajadas, horas que no se les devuelven por falta de personal para cubrir los días de descanso que les corresponden.

Esta reivindicación es inútil si no se acompaña de la necesaria exigencia de reforzar las plantillas, de cubrir las sustituciones, de un presupuesto de urgencia para revertir los recortes. Sin eso, no puede defendarse la sanidad pública. Solo se conseguirán movilizaciones vacías de contenido real, condenadas al fracaso. Canalizar el descontento de la población para impedir el deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública, convertirlo en



la potente movilización que necesitamos, exige un programa claro de reivindicaciones concretas.

Además, hay que relacionar lo que sucede en Valencia con lo que pasa en el resto del Estado, con Gobiernos de uno y otro signo. Con el mantenimiento de las disposiciones privatizadoras como la ley 15/97 y los artículos de la Ley General de Sanidad que permiten los conciertos con la privada y los consorcios. Y con la falta de financiación suficiente para las autonomías.

Un Gobierno que ha sacado de la chistera 10.500 millones extra para gasto militar bien podría dedicar más dinero a financiar la sanidad. Haría falta conjuntar las manifestaciones en todo el Estado para conseguir, en todas partes, las grandes manifestaciones que conocemos en Madrid o en Andalucía.

Blas Ortega

La situación en los centros de menores



Concentración en repulsa de los ataques a los centros de menores en Monforte

El pasado 28 de agosto grupos de extrema derecha convocaron una concentración frente al centro de primera acogida de Hortaleza en Madrid. Pese a que en un primer momento Delegación de Gobierno desautorizó la misma, en la práctica se realizó, con el concurso de los policías desplegados hermanados con los provocadores. Personal del centro resultó amenazado y sus imágenes divulgadas por redes. Los menores tuvieron que permanecer dentro del centro hacinados por la inacción de los que deberían protegerles. Días después tres menores de ese mismo centro fueron agredidos en la calle. Por las mismas fechas un centro de menores de Barcelona fue atacado con bombas incendiarias. Recientemente en Monforte de Lemos han sido atacadas también las instalaciones que van a albergar el nuevo centro de acogida de menores.

Estos episodios confluían con una política deliberada de destrucción de los servicios de protección a la infancia que se está desarrollando en todas las comunidades autónomas. Se está generando un falso discurso que trata de criminalizar y deshumanizar a los niños en situación de desprotección, a la par que desde los diferentes Gobiernos se desentienden de su obligación de garantizar el cuidado y protección de los mismos.

El modelo que se está imponiendo es el de macrocentros privados como el de la

Recientemente, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha anunciado la próxima aprobación de un real decreto para establecer unos estándares mínimos de calidad que contemplan algunas cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo, como son la bajada de ratios, la creación de centros pequeños integrados en los barrios... pero olvida una cuestión central, el carácter público necesario para garantizar una atención profesional adecuada y la verdadera integración de estos menores.

No es cierto que haya ningún desbordamiento como afirman los presidentes autonómicos, el problema reside en que no se quieren crear nuevas plazas.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se ha creado ni un solo centro de titularidad pública desde hace 25 años. Los servicios públicos tienen que crear plazas en la medida en que hay una necesidad de atender un derecho. La protección a la infancia en situación

Cantueña en Fuenlabrada, con más de cien chicos y chicas hacinados en medio de un polígono industrial. En

realidad, se trata de guetos, mal dotados,

con personal escaso y poco cualificado,



Concentración en el centro de acogida de menores extranjeros de El Masnou

con unas condiciones laborales inasumibles, en algunos centros se realizan jornadas de hasta 36 horas seguidas, en muchos casos con sobreocupación de plazas... Es inevitable que ningún trabajo normalizar, integrador e individualizado en estas condiciones.

de riesgo o desamparo es una obligación elemental del Estado que debe proveer los medios necesarios para garantizarla.

L. Arias

«¡La juventud frente a la reacción, por su futuro!»

No lo logró ni en Barcelona, ni en Pamplona, ni en Granada ni en Las Palmas.

El agitador de extrema derecha Vito Quiles viene siendo noticia en las últimas semanas por ser la nueva joven figura política que intenta tomar las plazas universitarias con aparatosas estrategias mediáticas.

Inspirándose en el activista estudiantil Charlie Kirk, utiliza la conocida estrategia de la extrema derecha en torno a la «libertad de expresión».

Por otra parte, genera alboroto en lugares donde previamente no había tenido la autorización para la realización de ningún acto. Por otra, utiliza la «libertad de expresión» para atacar las conquistas sociales de los trabajadores y para promover ideas contrarias a los intereses más genuinos de la clase obrera, como los derechos sociales o los derechos de los migrantes. Por esta misma razón, en Pamplona o en Barcelona se vio cómo los jóvenes

universitarios, en su gran mayoría provenientes de familias trabajadoras, organizaban verdaderos actos de rechazo a la manifestación de un contenido político rotundamente contrario a lo que la mayoría social defiende. ¿Cómo pretender que una mayoría de jóvenes acepte la proliferación larga y tendida de un discurso que atiende a la agenda política imperialista, que niega con violencia, año tras año, la reivindicación –la principal– de los jóvenes universitarios por una enseñanza superior pública y gratuita? Vito Quiles, esto no se trata de coartar la libertad de expresión; se trata de que la juventud trabajadora se hace respetar, con los medios que tiene y desamparada de las organizaciones tradicionales.

Ahora bien, tenemos que entender por qué Vito Quiles ve en las universidades un lugar propicio para ganar terreno político. Inevitablemente, tenemos que citar la insatisfacción de la juventud con los partidos de izquierda, cosa que no debe

confundirse con la pertenencia misma de estas personas a la clase trabajadora ni con la defensa independiente de los intereses propios de los trabajadores en la lucha de clases.

Los partidos tradicionales de izquierda han fallado repetidamente en atender a las exigencias más democráticas, obrando, a favor de los responsables, por la guerra social, por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, por la precariedad laboral sufrida por jóvenes –especialmente mujeres e inmigrantes– y por la inaguantable crisis de la vivienda.

Por estos motivos ve Vito Quiles la oportunidad de ganar terreno en las universidades, lugar por antonomasia para la gran afluencia de jóvenes inquietos y energéticos, con ganas de tomar las riendas de sus destinos.

Al contrario de lo que se intenta vender para desarticularnos, la juventud sí se interesa por su futuro y no se rinde ante los catastróficos anuncios de «un futuro

inevitablemente peor». Se está demostrando, rechazando la presencia de Quiles en nuestros espacios universitarios. Se demuestra participando en las multitudinarias movilizaciones por la reconstrucción de Valencia y por la dimisión de Mazón. Se demuestra, inequívocamente, en las masivas manifestaciones por Palestina. Por ello, la lucha por la construcción de organizaciones que defiendan los intereses sociales frente a los intereses de la austeridad y de la explotación es más necesaria que nunca.

En la esfera universitaria, son fundamentales las asambleas democráticas y abiertas que se inserten en el seno del movimiento obrero, con proclamas características de los problemas de la juventud (gratuidad de la educación superior, vivienda, salarios suficientes) que enlacen directamente a los jóvenes con el resto de trabajadores.

Sebastián Roland,
06/11/2025

Huelga de 48 horas En las universidades públicas madrileñas

«Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian»

La coordinadora en defensa de las universidades públicas madrileñas, con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, CNT y CGT, convoca huelga para los próximos 26 y 27 de noviembre. La huelga podría extenderse en función de la respuesta del gobierno regional, cuyos presupuestos se deben presentar en diciembre. La razón de la huelga es el ataque que padece la universidad pública, concentrado este momento en unos draconianos recortes presupuestarios y un Proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que, por lo conocido hasta el momento, cuestiona frontalmente derechos democráticos elementales.

El trasfondo es conocido: promover el negocio de la educación superior, frente a la concepción de la enseñanza como un derecho democrático que solo puede satisfacer la universidad pública.

El caso de Madrid es extremo, acorde al carácter ultraderechista del gobierno regional, pero la infarotación de las universidades públicas está generalizada en todo el Estado, así como el reaccionario marco legal que impuso la LOSU, continuista de la vieja LOU. Y se ciernen sobre ella la misma gran amenaza que sobre todo el presupuesto social: el desprendimiento armamentista que, de acuerdo con la imposición de EE. UU. a través de la OTAN, superaría el 10% de todo el gasto público. Los estudiantes y trabajadores de las seis universidades públicas madrileñas van a parar la actividad los días 26 y 27, porque está en juego la supervivencia de la universidad digna de este nombre, que pueda cumplir efectivamente su función social.

No puede ser una movilización puntual, sino que, reconociendo la indignación generalizada, esta huelga debe ser asimismo el anuncio de continuar el planteamiento hasta el final, hasta la consecución de las justas reivindicaciones planteadas.

X.A

Vitor Quiles expulsado de la UAB

Miles de estudiantes de la UAB impiden la presencia del provocador ultra Vito Quiles

Este jueves 16 de octubre, desde las once de la mañana, el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido escenario de una gran movilización estudiantil. En la plaza Cívica, miles de jóvenes se han concentrado para impedir la entrada del provocador Vito Quiles, que había anunciado una charla sin ningún permiso oficial de la universidad.

Quiles llegó al campus y se encontró con centenares de estudiantes dispuestos a plantarle cara. Entre cánticos, pancartas y una presencia masiva, lograron hacerle retroceder y dejar claro que la universidad no es un espacio para discursos fascistas ni provocaciones de odio.

Mientras que se movilizaban, los

Mossos d'Esquadra en vez de impedir el acceso a este personaje, cargaron contra los manifestantes.

La movilización dejó claro el mensaje: los jóvenes no pasan de la política. Pasan de ciertos políticos y de los discursos reaccionarios que intentan colarse en los espacios educativos, como por ejemplo todos aquellos que quieren blanquear el franquismo. El campus ha vuelto a demostrar que la voz de los estudiantes no se apaga fácilmente. Cuando la universidad se ve amenazada por la intolerancia, la juventud responde. Y lo hace alto y claro.

Amaia
(Corresponsalía UAB)



Estudiantes de la UAB impiden la entrada del provocador Vito Quiles

La vivienda necesita un plan de urgencia

La vivienda solo tendrá una verdadera solución cuando se afronten los dos obstáculos que la impiden: la propiedad privada y la liberación del suelo.

Todo lo demás no es más que habladurías y planes que, bajo los epígrafes de «construcción» y «protección social de las viviendas», esconden las palabras «especulación» y «corrupción».

La solución no pasa solo por construir
Existe la convicción entre los políticos que nos han gobernado y nos gobernan y en todas las instituciones, ya sea central, autonómica, diputaciones, ayuntamiento, que la solución al precio de la vivienda está en las leyes del mercado y su propia autoregulación, siempre bajo la premisa de la oferta y la demanda. Llegan a afirmar (ni ellos se lo creen) que cuanto más se construya, más asequibles serán, y hacia ahí conducen las directrices de los inversores inmobiliarios y toda la legislación. Hay que construir.

La ampliación de zonas edificables sin duda seguirá creciendo por razones obvias; ahora bien, antes de entregárselas a manos privadas en detrimento de las necesidades reales, se deben tomar otras medidas.

La concentración del capital también se instala en el sector de la construcción como la gran aventajada en

el enriquecimiento rápido y seguro. El capital necesita, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, acabar con las conquistas arrancadas por la clase trabajadora y finiquitar el denominado «estado del bienestar», y la vivienda es una de ellas. ¿Cómo renunciar a enriquecerse con la necesidad de la clase trabajadora de vivir dignamente?

La continuidad especulativa en la transición

Ya desde el gobierno de Felipe González, con el ministro Boyer, se impuso el liberalismo económico, siendo una de sus consecuencias el inicio de la liberación del mercado y la finalización de los contratos de alquiler indefinidos, a través de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Sin embargo, le correspondió al gobierno Aznar el gran salto a la desregularización del suelo con la Ley de 1998 que nos condujo a la burbuja inmobiliaria del 2008 con un resultado que estamos pagando los trabajadores.

Y los Gobiernos, que deben satisfacer las necesidades de aquellos que les votaron, siguen sin querer derogar la citada ley y se siguen apoyando en ella; al menos eso es lo que manifiestan como solución el presidente de la Generalitat Catalana en su plan de vivienda. Sin duda, la antesala de las

propuestas del Gobierno PSOE-SUMAR, que dan un paso más a favor de los especuladores de los fondos de inversión inmobiliaria, responsables de la actual situación, al pretender eximirlos de pago de ciertos impuestos, y eso por no hablar de la inocentada de proponer como ayuda al problema de la vivienda el establecimiento de un teléfono gratuito para consultas.

El plan del PSC

El plan de Illa consiste en activar todo el suelo de Catalunya, que podría llegar a convertirse en un solar en el que construir vivienda, pero para ello aún se debe aprobar el Proyecto de la Ley de Urbanismo y «un acuerdo de país». Todo ello concentrado en zonas que actualmente ya están saturadas. En Catalunya hay 25 áreas de estas características, la mayoría en el área metropolitana de Barcelona (10). Eso sí, la densidad se debería aumentar para proyectar edificaciones más altas y viviendas más pequeñas. Una parte de ellas está dentro del plan que está en funcionamiento gracias a fondos Next Generation. (Los fondos Next Generation son un mecanismo para estimular la recuperación en la zona euro. Están dotados de un importe de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 están destinados para España y 72.700 son, directamente,

ayudas a fondo perdido). Y todo ello para solo alcanzar un 15% de vivienda protegida.

Movilizar y organizar

Las grandes movilizaciones por todo el Estado y en particular la de Barcelona en noviembre del 2024, convocadas por el Sindicat de Llogaters, demuestran que sobre todo la juventud exige estos cambios.

La dispersión de las organizaciones que han ido surgiendo en relación a la exigencia de una vivienda digna exige la celebración de un encuentro estatal que permita explicar no solo las experiencias, sino concretar una hoja de ruta que obligue, frente al entramado legal y administrativo, al Gobierno a legislar a favor de los trabajadores y los jóvenes, y no de los inversionistas y especuladores, a través de un plan de urgencia y que, entre otras cuestiones, reconozca el derecho de vivienda como un derecho fundamental, ya que ni la Constitución española lo recoge como tal.

Por un plan de emergencia

Y que, en base al propio artículo Art. 47.2, que establece que «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando

la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación», regule por ley:

- La expropiación de las viviendas de la Sareb y de los fondos buitre.
- Una nueva ley del suelo, que establezca límites y condiciones de construcción, evitando la nueva edificación mientras existan viviendas vacías, que de no ser alquiladas al precio estipulado y que permanezcan vacías a la espera de la especulación, pasasen a depender mediante alquiler limitado y social de los parques municipales de vivienda.
- La limitación del precio de alquiler de forma automática.
- Una nueva Ley de Arrendamiento Urbano, mediante la cual se amplíen los plazos y condiciones de las prórrogas del alquiler.
- Ley prohibiendo los desahucios donde no existan viviendas sociales para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna.
- Ley que impida la descalificación de las viviendas protegidas para que no puedan ser trasladadas al mercado privado. Favoreciendo el tanteo y retracto de los municipios para que puedan ser adquiridas por el municipio.
- Nueva ley hipotecaria que regule la prestación sin intereses para la compra de la primera vivienda.

Pere Centelles

¡Mazón no dimite, entre todas lo hemos echado!

Nos mintieron. Se rieron de nosotros, nos no avisaron y no respetaron a nuestros seres queridos. Han hecho negocio con nuestro dolor, con el asesinato de 230 personas y los miserables lo denominan «reconstrucción».

Aun así, no han podido con un pueblo que todavía no ha podido secarse las lágrimas ni vivir el luto que necesita. Un pueblo que no ha desistido en su esfuerzo de denunciar la impunidad y la negligencia criminal, ni de exigir verdad y justicia. La vida humana es irreparable.

Esta es la victoria de las familias de las personas asesinadas y de sus asociaciones; la victoria de los pueblos anegados que, saliendo del barro a trompicones, se organizaron en sus comités locales luchando por la reconstrucción de la vida, sin dejar de exigir la dimisión de Mazón y de su Consell; la victoria de los periodistas que se atrevieron a buscar y encontrar la verdad y sacarla a la luz; la victoria de las miles de personas que han movilizado cada mes de este año y no han desfallecido; la victoria de las miles de personas solidarias que desobedecieron y salvaron la vida de las personas de las zonas afectadas cuando las instituciones nos abandonaron. Todo esto ha generado una importante presión popular en muchos ámbitos. Un claro ejemplo es la jueza de Catarroja, que, a pesar del sistema judicial existente, está haciendo una tarea incommensurable.

Esta es la victoria de la organización popular y comunitaria, de sus espacios de encuentro y coordinación, como la plataforma *Mazón Dimisión* y el Acuerdo Social Valenciano. También de todas las personas anónimas que han impedido que pudieran estar tranquilos en ningún momento. Pero, si se va Mazón, su Consell y otros cómplices tienen que acompañarlo, como por ejemplo todo el entramado empresarial que ha sacado beneficio económico de la muerte y el Partido Popular y VOX, que han mantenido un asesino para sus cá-

las poblaciones y comarcas anegadas con la participación de la ciudadanía; planes de emergencia y de choque que comportan la reparación inmediata de viviendas, colegios e infraestructuras; derogación de los decretos y presupuestos de la vergüenza; exigencia de la deuda histórica del Estado con el País Valenciano; pago inmediato de los impagos a todos los servicios y centros dependientes o concertados con la Generalitat Valenciana. Y, por supuesto, una renta garantizada que haga que nadie quede atrás en esta recuperación que tiene que significar la reconstrucción social del país.

El pueblo valenciano ha cumplido su primer objetivo: echar a Mazón. Pero la catástrofe de la daña no puede darse en cualquier parte del país, para sobrevivir necesitamos unas políticas que no niegan el cambio climático; ¡no queremos más muertos! Los presupuestos aprobados por el Partido Popular y VOX agreden todos los sectores sociales de nuestro país: las mujeres, las personas migrantes, nuestra lengua, la defensa por una vivienda digna, etc.

Mazón se va, pero los problemas continúan. No permitiremos las propuestas continuistas de políticas manchadas de muerte. Es por eso por lo que, ahora más que nunca, toca continuar luchando y construyendo soberanía popular.

La reconstrucción social del país la hemos de diseñar y llevar a cabo entre todas y todos. Pueblo a pueblo, comarca a comarca.

¡Unimos las luchas, hacemos pa's!

Para iniciar este camino, desde el Acuerdo Social Valenciano invitamos a todas las personas y organizaciones, especialmente a las que han participado en este inmenso movimiento por la justicia, a una reunión que se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre a las 11h de la mañana, en el Parque Alcosa, en el corazón de las zonas afectadas.

Continuar la lucha es la mejor



balas electorales.

Hoy toca honrar nuestra lucha, pero también pensar: ¿y ahora qué viene? Esto solo lo puede decir y decidir el pueblo valenciano. No aceptaremos ser el experimento de las políticas macabras diseñado en Madrid por el Partido Popular y VOX.

Podríamos hablar de algunas de las propuestas para empezar a dibujar las actuaciones imprescindibles a partir de ahora: reconstrucción de

manera de honrar la memoria y tener siempre presentes a nuestros seres queridos.

Exigimos justicia y responsabilidades penales contra Mazón y todos sus cómplices.

VERDAD, JUSTICIA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL.

ACORD SOCIAL VALENCIÀ

29 de noviembre: Día internacional de Palestina

El 29 de noviembre tendrá lugar la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebra desde 1978 y que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977. Ese día en 1947, la Asamblea aprobó la resolución 181, que posteriormente se conocería como la «resolución de la partición».

Una participación en dos Estados, uno judío

Gaza y que continua pese al bochorno-so, perverso y mal llamado «Acuerdo de Paz» promovido por el aspirante a premio Nobel, Donald Trump, es lo que el pueblo palestino lleva sufriendo desde hace más de 78 años.

En estos últimos meses hemos visto como las movilizaciones por Palestina se han intensificado y han dado la vuelta por todo el mundo: el intento de la Flotilla de querer romper el aislamiento por la vía marítima con una representación internacional de militantes y activistas por la defensa y la libertad de los derechos y la resistencia del pueblo palestino, las huelgas secundadas por los trabajadores, estudiantes y la juventud en Alemania y Francia, la jornada de lucha en España

Gobiernos para que actúen y tomen medidas reales, exigiéndoles la ruptura de todas las relaciones diplomáticas con Israel, y un embargo total de las armas y el comercio de cualquier material de guerra.

Nadie da credibilidad al acuerdo de paz que presenta Trump, las muertes y las violaciones de los derechos de los palestinos siguen siendo la tónica habitual de un proyecto de exterminio. En el falso acuerdo no se habla de reconstrucción ni de reparación, tampoco del derecho al retorno ni de recuperación de las tierras robadas, y mucho menos del derecho de autodeterminación.

Contra el intento desmovilizador, que impulsan y promueven diferentes medios de comunicación, el apoyo y la unidad que la sociedad muestra por medio de los diferentes colectivos: movimientos sociales, partidos políticos, sindicato de estudiantes, movimiento de pensionistas, etc., en favor de la resistencia palestina, debe continuar y con más fuerza y convicción que nunca.

Este próximo 29 de noviembre se celebrarán manifestaciones en diferentes territorios; en Barcelona a partir de las 12 se dan cita diferentes organizaciones en el parque de Joan Miró, y en Madrid a las 18 horas partirá la manifestación unitaria desde Atocha por las calles céntricas de la ciudad, en las que el movimiento obrero, con sus organizaciones sindicales, tendrá una nueva oportunidad para dar voz y defender la causa palestina.

En otras poblaciones, pedid la cita a quien os pasa Información Obrera. Hoy es Palestina, mañana puede ser cualquier otro pueblo.

**Juan Fernando
Miembro del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)**

Última hora 9 de noviembre, movilizaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública

Convocados por los sindicatos con presencia en la sanidad andaluza y las respectivas Mareas, miles de andaluces de las 8 provincias se manifestaron por las calles de las capitales respectivas, quizás, la ciudad de Sevilla junto a Málaga las de mayor presencia de personas cifrando los organizadores en unos 30.000 en Sevilla, donde, desde la estación de San Bernardo al palacio de San Telmo (sede de la Presidencia de La Junta) recorrieron las calles al grito de: ¡Bonilla dimisión, vete a Quirón! y ¡La sanidad no se vende!

Después del triunfo de dichas

movilizaciones, quizás sería necesario hacer alguna reflexión sobre la composición variopinta de dichas movilizaciones, a saber, el grueso de las manifestaciones desde años anteriores podemos afirmar que lo componen los movimientos sociales sin una expresada orientación política determinada, pero esta vez, por fin, aparecieron las siglas sindicales en la movilización en la calle en defensa de la sanidad pública, demostrando que mantienen la capacidad de convocatoria.

Quizás muchos trabajadores se pregunten por qué las direcciones

sindicales no ocupan el papel que les corresponde en esta lucha.

La segunda reflexión que tal vez habría que hacer es preguntarse dónde están los partidos que dicen representar los derechos de los trabajadores y orgánicamente estaban ausentes de dicha movilización.

Y quizás más llamativo es que no solo las organizaciones históricas sino también las llamadas nuevas tampoco se hicieron ver, cosa que no quiere decir que no hubiese presencia de sus militantes.

Pepe Gallego,



Entrevista a Amal Ramsis

Amal Ramsis es una abogada, directora y guionista de cine egipcia. En 1992, en Egipto, fue fundadora del Centro de Estudios de Mujeres Maan. A partir de 2008 organizó la Caravana de Cine Árabe e Iberoamericano de Mujeres o 'Entre Cineastas'. En 2009 fue designada titular de la Cátedra Euroárabe de las Artes y las Culturas y fue premiada con la beca anual para las artes y la literatura por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada. En 2011 dirigió *Forbidden*, un primer largometraje que recibió varios premios. En 2013, en el marco del XI



Festival de Cine y Derechos Humanos realizado en Donostia, encabezó el taller de Edición de Video Un Minuto titulado 'Mi Generación' dirigido a mujeres no profesionales en el campo audiovisual. En 2015 dirigió *Athar Al Farasha* o *The Trace of the Butterfly*, referida a la historia de personas que se cruzan con nuestras vidas y se van, pero después de un tiempo descubri

mos que no solamente influyeron en el curso de nuestras vidas, sino incluso pueden llegar a cambiar la perspectiva de todo un país.

IO: ¿Cómo ves la continuidad de las movilizaciones por Palestina? ¿Qué relación existe entre su lucha incesable y los problemas aquí?

Amal: Creo que las movilizaciones en apoyo y solidaridad al pueblo Palestino no pueden verse desde la perspectiva de un pueblo que está en ventaja sobre otro, como si las únicas víctimas fueran los palestinos. Todas estas movilizaciones tienen que hacernos pensar: ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Hay que pensar que lo que están sufriendo

los palestinos es una cara de la moneda. Yo soy de un pueblo en el que goberna la derecha y no hay tradición de movilización. A partir de las manifestaciones por Palestina se han ido reivindicando otras cosas. Creo que esa es la conciencia que tenemos que trabajar para dar pasos hacia delante. Claro que estamos mejor que en Palestina, pero lo que tenemos que entender es cómo este sistema también nos opriime a nosotros. Cuando salgo a la calle a defender a los palestinos, también estoy defendiendo su resistencia. Si ellos están resistiendo, nosotros tenemos que poder hacer más contra los ataques que aquí sufrimos. Ahora es el momento para seguir con la movilización y que eso sirva para defender nuestras reivindicaciones. Todo ese dinero que va para las armas tiene que ir para la sanidad y la educación

públicas, por eso esa relación entre lo que está pasando en Palestina con lo que pasa en Europa, Asia o América Latina es lo que tenemos que desarrollar como movimiento.

IO: ¿Qué te parece el Acuerdo de Paz? ¿Y cómo puede repercutir en las movilizaciones?

Amal: Lo que se habla en casi todos los medios de comunicación es que el alto al fuego va a acabar con la resistencia. Lo que leo en algunos periódicos árabes es totalmente distinto a lo que leo en los medios europeos, porque lo que la resistencia ha aceptado es solo la primera parte del Acuerdo. El comunicado de todas las organizaciones de la resistencia deja claro que dejar las armas es una línea roja. Gaza debe ser dirigida por organizaciones palestinas, el alto al fuego no significa la derrota. La resistencia palestina sigue en pie. Las fotos de miles de personas volviendo a sus casas [que no existen], que no están! Israel está en una crisis, y todo esto se está intentando maquillar con este Acuerdo. No es una victoria para la resistencia, pero tampoco es una derrota. Lo más importante es ver que no son víctimas a las que están matando, sino que son personas que están resistiendo y, por eso, existe este Acuerdo. Si la cosa fuese tan fácil no habría estos acuerdos y el plan de Trump de hacer de Gaza un resort habría funcionado perfectamente.

Corresponsal

8 de noviembre Asamblea del CATP de Tarragona

El pasado 8 de noviembre se presentaron las resoluciones de la conferencia realizada el día 4 de octubre en París, en el encuentro contra la guerra y contra el genocidio del pueblo palestino.

La asamblea en la que participaron 32 compañeros y compañeras fue presentada por **Jordi Salvador i Duch**, diputado por ERC en el Congreso. Extraemos algunas manifestaciones realizadas por los que intervieron en la misma.

Miguel González inició las intervenciones recordando el papel que ha jugado el CATP desde su fundación, destacando entre otras actividades el trabajo por la derogación del Art. 315.3 del CP, que permitió hasta su derogación mantener encuadrados a centenares de sindicalistas que participaron en los piquetes informativos de las huelgas sectoriales de 2010, así como de la general realizada el 2012. También destacó la campaña estatal e internacional por la libertad de los presos políticos del Procés y por su amnistía.

A continuación, intervino **Joan Galera**, estibador jubilado del puerto de Tarragona, explicando la utilidad de los debates y la información facilitada por el CATP, en particular durante el conflicto de los estibadores durante 2017. Informando de las campañas realizadas en Tarragona.

Posteriormente tomó la palabra **Anna Gómez** de la asociación "Dignitat a les vies" informando del nacimiento de la asociación a la que pertenece, como consecuencia del permanente mal funcionamiento de cercanías de Renfe y otros transportes de cercanía, destacando la necesaria movilización desde abajo y cómo es posible conseguir organizar en torno a ello.

Estaba prevista la intervención de **Maria Pozuelo**, coordinadora de Podem Catalunya que, ante la imposibilidad de asistir, dirigió un comunicado a los presentes del que decíamos: «Frente a la política que pretende imponer Trump y la amenaza de la extrema derecha, frenarles es nuestra obligación y acontecimientos como los vividos en París donde distintos movimientos buscamos la necesidad de ese reagrupamiento es hoy una tarea urgente e imprescindible para hacerles frente».

Posteriormente tomó la palabra **Laura Castel**, presidenta de El Grupo Unificado de la Izquierda Europea (UEL), informando a los asistentes tanto de la composición

Nuevos actos

Dentro del desarrollo de la campaña informativa para informar de las resoluciones aprobadas en la Conferencia de París contra la guerra y el genocidio del pueblo palestino.

En Barcelona, el próximo día 26 de noviembre a las 18h30, PODEM CATALUNYA convoca en el local de "Espai línega", Calle Girona 52. Está prevista la participación de tres de los asistentes a las conferencias: María Pozuelo, coordinadora en Catalunya de la formación morada; Jordi Salvador, diputado en el congreso por ERC de Tarragona; y Ángel Tubau, del comité de redacción de "Información Obrera".

En Sant Boi también se realizará, convocada por el CATP del Baix, el próximo día 20 de noviembre en el Centro Cívico "Hotel d'Entitats", calle Riera 4 de la citada localidad.

del citado grupo como de las actividades realizadas, poniéndose a disposición en lo que pudiera contribuir en la campaña surgida contra la guerra en los actos celebrados en París.

Cerró la primera parte de la asamblea **Ángel Tubau**, del comité de redacción de Información Obrera, asistente al encuentro internacional. Su intervención, recogiendo elementos de los participantes en la conferencia internacional se concretaba en la necesidad de rearmar a la izquierda, en la necesidad de ruptura con reivindicaciones claras y concretas, como expuso el recién elegido alcalde de Nueva York, Mandani, cuyo primer mensaje prometía el cumplimiento de las reivindicaciones concretas de sus votantes, como el de la gratuidad de las guarderías, sanidad gratuita, impuestos a los más ricos...

Abierto el espacio de debate tomaron la palabra diversos asistentes, militantes de ERC, antiguos militantes del PCC, todos ellos agradeciendo el espacio de debate. A destacar la intervención del alcalde de Bellpuig, **Jordi Estiarte**, que empleaba a seguir con la dinámica generada como marco excelente y sincero de debate y acción, y la de **Víctor Iniesta**, miembro del CATP de Sant Boi de Llobregat y de la Asamblea por una Vivienda Digna de la misma localidad, llamando la atención sobre la participación de la juventud en las movilizaciones del último período, donde se demuestra que ante reivindicaciones claras, la juventud está dispuesta a entrar en la arena política y así frenar el avance de la extrema derecha.

El acto concluyó con el acuerdo de seguir desarrollando la campaña contra la guerra y el genocidio del pueblo palestino en localidades o marcos donde se pueda desarrollar, el compromiso de participar en todas las movilizaciones al respecto y en particular la convocada para el próximo día 29 de noviembre de apoyo al pueblo palestino, así como empezar a trabajar para una nueva asamblea dando continuidad al CATP e instar a la coordinadora del CATP a organizar un acto-mitín central encabezado por los delegados y delegadas y organizaciones que participaron en el encuentro de París.

Tarragona, 8 de noviembre
Miguel González
CATP de Catalunya

Sabadeill Palestina: Hay que continuar con la movilización



El Comité contra la Guerra y el Genocidio de Sabadell ha decidido organizar un acto para el próximo día 15 de noviembre en el "Casal Pere Quart" de la localidad, a las 11 de la mañana. Se trata de denunciar que con el supuesto "Acuerdo de Paz", que ya ni tan siquiera puede considerarse un acuerdo de "Alto el Fuego", el genocidio continúa, las ocupaciones ilegales persisten, las provocaciones siguen.

La falsa del supuesto Acuerdo de Paz patrocinado por Trump, y asumido por la UE, ha durado lo que la cruda realidad desmiente a diario. Desde la firma ya han sido asesinados casi 300 palestinos. Es por eso que el Comité contra la Guerra ha decidido convocar un nuevo acto. Va a contar con la participación de CCOO y UGT, así como representantes de los Comunes, Podemos y de Información Obrera. El objetivo es también denunciar las políticas de guerra y afirmar alto y claro que es necesario continuar con la movilización.

Corresponsal

CONTRA LA GUERRA I EL GENOCIDI, PER LA RUPTURA:
PRESENTACIÓ DEL MITIN DE PARÍS



Dijous 20 de novembre a les 18.30h
Hotel d'entitats (C/Riera, 4), Sant Boi

CATP - informacionobrera.org



democrático con que se toman las decisiones, se reparten las tareas y se abre el turno de palabras en las concentraciones, para que todos los asistentes puedan intervenir y hacer las propuestas que consideren.

En el comité participan militantes de ERC, IU y Podemos así como miembros del CATP. La mesa estuvo formada por la mayoría de miembros del comité que hicieron una breve intervención, para dar paso inme-

diatamente después al compañero Mazeed Khalilia de la Comunidad Palestina y Dominique Salomón de la Asociación Judíos y Palestinos Juntos.

La última intervención correspondió a un miembro del comité que distinguió entre sionismo y judaísmo, denunció una vez más el genocidio cometido y rechazó el mal llamado acuerdo de paz al calificarlo de impusión al pueblo palestino para tratar de reforzar al Gobierno de Netanyahu, remarcó la importancia que tenían las manifestaciones multitudinarias que se están dando en todo el mundo,

continuó haciendo un llamamiento a continuar defendiendo al pueblo palestino frente

Corresponsal

La campaña de la auditoría sigue en la calle

El pasado 25 de octubre, los y las pensionistas volvimos a reunir a miles de personas defendiendo las pensiones públicas. Dejamos un mensaje claro: «La lucha continúa».

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) seguimos con la campaña de recogida de firmas y mociones en todo el Estado para exigir el cumplimiento de la Ley 21/2021 y realizar la auditoría.

ma de desmontar el maná que reiteradamente se escucha de que no son sostenibles, dejará sin argumentos a la banca y aseguradoras privadas que no buscan más que la privatización para beneficio propio.

Hay informes económicos que aportan cifras de estos gastos impropios, entre ellos el informe sindical presentado por CCOO que alcanza la cifra de 519.104 millones de euros, dinero de cotizaciones sociales que sobró después de pagar pensiones durante años. Esto

Cuentas determinó en ese periodo temporal. Con esa cuantía podrían tomarse medidas para resolver algunas de las reivindicaciones recogidas por el movimiento pensionista. Brecha de género, pensiones mínimas al nivel del SMI, viudedad, jubilaciones anticipadas sin penalización... reivindicaciones históricas del movimiento pensionista.

COESPE siempre ha defendido que nuestro Sistema Público de Pensiones es sostenible y defendemos que lo que realmente lo debilita ha sido el desvío de cotizaciones para gastos ajenos que no están relacionados con las pensiones.

Por eso exigimos que se cumpla lo que votó el Parlamento y la auditoría permita determinar los importes desviados, qué instituciones han sido beneficiadas con los gastos impropios y estas sean responsables de compensar el vacío de la hucha de las pensiones.

Madrid vuelve a las calles con sus «Lunes al Sol», defendiendo pensiones públicas y la auditoría.

Ni un paso atrás: Pinto, S. Sebastián de los Reyes, Aluche, Carabanchel, Vallecas, Rivas, San Blas, Madrid Centro. Con la satisfacción de una campaña que lleva más de 10.000 firmas y mociones aprobadas en todo el Estado: Adeje, Agost, Alameda, Ablaet de la Ribera, Albuixech, Alzira, Antequera, Badia del Valles, Barbería del Valles, Barcelona, Barx, Burjassot, Cabrería del Mar, Cádiz, Campillos, Castelldefels, Cernayola del Vallès, Conil de la Frontera, Corbera, Cornellá de Llobregat, Cortes de Aragón, Elda, Esparraguera, Fortaleny, Gavà, Getafe, Granollers, Güímar, Jaca, Jerez de la Frontera, La Laguna, La Orotava, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Los Silos, Málaga, Mérida, Molins de Rei, Mollet del Vallés, Moncada y Reixach, Monóvar, Monzón, Olesa de Montserrat, Peter, Polinyà, El Prat de Llobregat, Riola, Ripollet, Rivas Vaciamadrid, Rotglà y Corbera, Rubí, San Sebastián de los Reyes, Sabadell, Sabiñanigo, Sant Adrià de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç del Horts, Santa Coloma de Gramanet, Sollana, Sueca, Tarragona, Tegueste, Terrasa, Torrox, Úbeda, Vélez Málaga, Viladecans, Viladecans, Viladecavalls, Xàtiva, Zaragoza.

Ana Pérez



Desde la Ley General de la S/S de 1967, con las cotizaciones para jubilación de la clase trabajadora se ha estado financiando con miles de millones, los denominados «gastos impropios» que nada tiene que ver con el pago de pensiones.

La realización de la auditoría demostrará la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, es la for-

demuestra el superávit del sistema de Seguridad Social, que el dinero no se destinó a dotar el Fondo de Reserva y que los diferentes Gobiernos lo destinaron a gastos impropios.

El Tribunal de Cuentas determinó la cifra de 103.690 millones (entre 1989 y 2018). Exigimos que sean recuperados esos millones de euros que el Tribunal de

Getafe reclama al Gobierno que audite las cuentas de la Seguridad Social

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe, celebrado el pasado 28 de octubre, aprobó una proposición presentada por Más Madrid Compromiso con Getafe, a la que posteriormente se unió el grupo municipal Podemos- Izquierda Unida-Alianza Verde, para instar al Gobierno de España a cumplir con urgencia la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. El objetivo de esta medida es clarificar la situación financiera del sistema público de pensiones y devolver a la Seguridad Social las cuantías desviadas durante años a gastos impropios, en caso de que la auditoría refleje un superávit.

No es la primera vez que se debate en el Pleno de Getafe esta cuestión, que denuncia de nuevo que, en lugar de reforzar el fondo de reserva —la conocida hucha de las pensiones—, los distintos Gobiernos han permitido su vaciamiento, mientras se siguen aprobando medidas que retrasan la edad de jubilación, endurecen los requisitos de acceso y promueven el alargamiento de la vida laboral.

La propuesta, defendida en el Pleno por la concejala de Más Madrid Compromiso con Getafe, Elena Sánchez, contó con el respaldo de todos los grupos municipales salvo el PSOE de la alcaldesa Sara Hernández, que optó por la abstención. La votación final permitió aprobar la proposición, que se enmarca en una reivindicación histórica del movimiento de pensionistas y que busca demostrar

que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible, pero que los fondos han sido utilizados para cuestiones distintas al sostenimiento de las pensiones. «No se puede pedir a la gente que trabaje más años mientras no se acleara qué ha ocurrido con miles de millones que pertenecen a la Seguridad Social», defiende la organización.

La auditoría de las cuentas de la Seguridad Social fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 2021, con el objetivo de analizar el uso que se ha hecho de los recursos del sistema público a lo largo de las últimas décadas. En la proposición aprobada se señala que durante muchos años ha habido más ingresos que gastos, pero, sin embargo, ese superávit se ha destinado a financiar partidas ajenas a las pensiones. Y que es imprescindible que se conozca el verdadero estado contable del sistema y que los fondos desviados sean restituidos a la Seguridad Social, porque son patrimonio de todos los trabajadores y trabajadoras de este país.

Con la aprobación de la motion, Getafe se suma a los municipios que reclaman claridad y rendición de cuentas en la gestión de la Seguridad Social.

El resultado de la votación en el Pleno del 28 de octubre fue el siguiente: A favor 15, Más Madrid Compromiso con Getafe(3 votos) Podemos (2 votos), Vox (2 votos) PP (10 votos) y abstención los 10 votos del PsOE.

Ana González Mariscal

Por la recuperación del poder de compra de los salarios

El Instituto Nacional de Estadística estima que el IPC anual en octubre de 2025 es del 3,1%, sin embargo, esta subida no refleja la capacidad de compra del conjunto de los trabajadores.

Este indicador de la inflación se calcula en base a una «cesta de la compra» base, en la que los diferentes productos de consumo se ponderan en función de su peso en el gas-

descendido un 1,5 % desde 2022, según el INE. Sin embargo, el gasto en vivienda puede suponer un 80%, incluso un 90% del salario para muchos trabajadores; de ahí el incremento acelerado del número de trabajadores, sobre todo jóvenes, que deben vivir en una habitación o compartir piso para poder comer.

Citamos un informe del Gabinete Económico de CC. OO. sobre IPC



to familiar. Por ejemplo: vivienda el 14%, alimentos el 20%, ocio y cultura el 7%, etc.

No hay más que comentar, la vivienda supone, según la ponderación actual de INE, el 12,7 % del gasto familiar, cuando en 2022 el porcentaje o ponderación asignada a la vivienda en el IPC era del 14,2 %. Es decir, que el gasto en vivienda ha

de septiembre de 2025: «La carestía de la vivienda se come la mejora de los salarios.

El IPC no refleja toda la subida del coste de la vida. No incluye el coste de comprar una vivienda (+13% en 2025) y la subida del coste de alquilar una vivienda en los últimos años (según otras estadísticas del INE) es mayor de la que muestra el IPC.

En nuestra WEB

- Entrevista a Amal Ramsis

<https://informacionobrera.org/entrevista-a-amal-ramsis/>

- «El fin de una fase, el comienzo de otra... y la necesaria revisión»

Por Awad Abdelfattah

<https://informacionobrera.org/el-fin-de-una-fase-el-comienzo-de-otra-y-la-necesaria-revision/>

- Balance del 15 de octubre, jornada de movilización de los trabajadores y la juventud en apoyo a Palestina.

Por Pablo García

<https://informacionobrera.org/balance-del-15-de-octubre-jornada-de-movilizacion-de-los-trabajadores-y-la-juventud-en-apoyo-a-palestina/>

- 15 de octubre: Lima y las regiones gritaron ¡fuera Jeri! ¡cierra del Congreso! ¡que se vayan todos! ¡Asamblea constituyente ahora, para cambiar el país!

Redacción *El Trabajo*

[https://informacionobrera.org/15-de-octubre-lima-y-las-regiones-gritaron-fuera-jeri-cierra-del-congreso-que-se-vayan-todos-asamblea-constituyente-ahora-para-cambiar-el-pais/](https://informacionobrera.org/15-de-octubre-lima-y-las-regiones-gritaron-fuera-jeri-cierra-del-congreso-que-se-vayan-todos-asamblea-constituyente ahora-para-cambiar-el-pais/)

La fuerte carestía de la vivienda desborda la capacidad de pago de los hogares, agrava el sobreesfuerzo que deben realizar y en muchos casos les excluye del acceso a una vivienda»

Y la Nota de Coyuntura Económica de UGT del pasado 15 de octubre: «También cabe alertar cómo el precio de algunos alimentos básicos para la población trabajadora está aumentando notablemente en estos primeros nueve meses, con cifras de crecimiento que alcanzan, incluso, los dos dígitos».

Al mismo tiempo, ambos sindicatos constatan que: «Los márgenes empresariales siguen en máximos a costa de los salarios.

En el 2025 el valor añadido sobre ventas (25,4%) y margen bruto sobre ventas (13,6%) están en máximos históricos, según los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales. La participación de los márgenes empresariales en el valor añadido sigue por encima de su media histórica a costa de los salarios.

El fuerte aumento del valor añadido empresarial y de la productividad por asalariado entre 2018 y 2024, generalizado por sectores y tamaño de empresa, abre márgenes y cierra excusas para subir salarios y reducir la jornada laboral».

En conclusión, mantener el IPC como referencia para el incremento de los salarios en la negociación colectiva no supone que se recupere el poder de compra de los salarios. Constatarlo no es suficiente, los dirigentes sindicales deberían organizar la lucha, una lucha sin concesiones, por la recuperación del poder de compra de los salarios, una lucha del conjunto de los trabajadores.

Blas Ortega

El negocio del aborto y la objeción de conciencia



La ministra de Sanidad, presentando el último informe sobre interrupciones del embarazo.

La penúltima provocación de Isabel Díaz Ayuso ha levantado ampollas entre la ciudadanía, muy especialmente entre las mujeres. Y no sin razón.

La presidenta del «se iban a morir igual», se erige ahora en paladín de la defensa del «derecho a la vida» de los fetos nonatos, con su estilo inconfundible: «que se vayan a abortar a otro lugar», dice a las mujeres

madrileñas, pasando por alto su obligación de cumplir la ley.

Pero la realidad es que esta bravuconada no supone un gran cambio respecto a la situación actual. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en cualquier punto del Estado, no solo en Madrid, ya tienen que «irse a otro lugar», más concretamente a las clínicas privadas. Aunque España aprobó la Ley del

Aborto en 2010 y estipula que los abortos se hagan en la red pública contemplando como «excepcional» hacerlo en centros acreditados, se optó por seguir manteniendo la vía de los conciertos aunque no existan centros privados con los que concertar el servicio.

Esta situación obliga a miles de mujeres al año a desplazarse a otras provincias para abortar porque ni siquiera en estas situaciones los públicos los asumen. Eso a pesar de que la ley reconoce «a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan».

En estos años transcurridos no ha habido ninguna evaluación pública sobre su aplicación, pero salen a la luz testimonios que la ilustran. Es el caso del hospital público Clínico San Carlos de Madrid, que se negó a realizar un aborto a una mujer pese a la inviabilidad del feto. El centro adujó objeción de conciencia de todo el servicio y la derivó a una clínica privada. Pero ha ocurrido en otras ocasiones: en 2016 una mujer fue obligada a recorrer 500 kilómetros para abortar, un viaje en el que perdió el útero y por el que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) fue condenado. Un año después otra mujer denunció al Servicio Murciano de Salud por negarle información sobre el feto y ser derivada también a una clínica de la

capital. No son casos aislados: la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo no se producen en centros de la red sanitaria pública, sino en clínicas con las que la Administración concierta el servicio. Según datos de Sanidad, en 2024 se hicieron por esta vía el 78,74% del total, aunque esta proporción varía según las comunidades autónomas. Para sorpresa de nadie, el porcentaje de abortos realizados en centros privados en la Comunidad de Madrid asciende al 99,53%, solo superado por el 99,97% de Andalucía.

En todos los casos las razones que adujeron los servicios hospitalarios apuntaban a la objeción de conciencia. Tampoco es algo excepcional: cuando las consejerías son preguntadas sobre por qué los centros públicos no asumen los abortos suelen dar este motivo.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de objeción de conciencia? No es solo una cuestión ideológica, que también existe, sino que se suma a otros motivos. La falta de formación y de interés y estigma: Muchas veces se da una objeción profesional más que ética. Sigue siendo una práctica estigmatizada y no normalizada que ni da prestigio ni suma en la carrera profesional.

A esto se suma el negocio que genera a las clínicas privadas, que ejercen como un lobby para no per-

der nicho de mercado. El País del 11 de octubre publicaba este dato: «Las autonomías gastan 150 millones de euros en cinco años para financiar con dinero público abortos en clínicas privadas».

Con todo, la ley reconoce el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, pero también establece que debe «manifestarse anticipadamente y por escrito» precisamente para que «el acceso y la calidad asistencial de la prestación no puedan resultar menoscabadas» por su ejercicio. En muchos casos se está haciendo una objeción de conciencia institucional que en realidad es ilegal. Existen direcciones de hospitales y jefes de servicio de ginecología que imponen que no se practiquen abortos.

La objeción de conciencia no cabe en un servicio público que debe garantizar el acceso a un derecho fundamental reconocido por ley.

El recorte de derechos y libertades, tales como el aborto, el control de natalidad y la eliminación de servicios públicos abondan aún más en la situación de opresión y explotación de la mujer.

Hecha la ley hecha la trampa.

Silvia Martínez
Mujeres Republicanas

Se ha disuelto la asociación “La Carpa”

Información Obrera entrevista a Alfonso Romera, uno de sus portavoces



onoczo a Alfonso desde hace años, por contactos profesionales. En los últimos años, nos hemos encontrado en muchas movilizaciones sociales. Hace unos días, nos anunció la disolución de La Carpa, la asociación de la que él era una de las cabezas visibles. Dialogamos con él sobre los motivos que les han llevado a esa decisión, haciendo un balance del papel de la acción humanitaria, de las ONG y de los gobiernos en este terreno

¿Por qué se ha disuelto la “Carpa”?
Porque desde que se inscribió “La Carpa” en el registro de asociaciones de Andalucía en agosto de 1995, con el único objetivo de poner bajo techo a las mil personas que duermen en la calle en Sevilla y los 4.000 temporeros que malviven en los campos de fresas de Huelva no hemos conseguido poner bajo techo ni a una sola persona.

¿Qué ha hecho la carpa desde el 1995?

Hemos organizado 500 puntos calientes en Plaza Nueva y Plaza de la Gávida en Sevilla para generar un espacio de confianza donde semanalmente tomar el pulso a la situación de desamparo de las mujeres y hombres, ve-

cinos de Sevilla que duermen en las aceras de la ciudad. Hemos llevado a cabo 200 expediciones a los asentamientos de temporeros a migrantes de Huelva que viven en chabolas, vecinos de Lepe, Palos de Frontera y Lucena del Puerto. En ellas hemos repartido cientos de toneladas de alimentos no perecederos normalizados; toneladas de garrafas de agua mineral, fritura fresca, cocinas, zapatos, fardos de ropa clasificados por tallas, bicletas...

Hemos hecho el acompañamiento a pie de calle de eurodiputados, diputados nacionales y autonómicos, fotógrafos, periodistas, informativos de radio y televisión, curiosos... en fin, convertidos en meros guías turísticos en un parque de desolación. Siempre hemos podido responder, tras la decena de incendios en los asentamientos, con ayuda urgente¹. Gracias a la ayuda mutua² de vecinos de toda España movilizados de inmediato.

¿Cuál ha sido la relación con las autoridades y los políticos?
Totalmente infructuosa. A fecha de hoy, tanto la administración central como la autonómica y local están centradas en la privatización de los

servicios sociales (geriátricos, albergues para personas sin hogar, centros para menores no acompañados, CIES, seguridad de las fronteras, comedores de los servicios públicos, colegios públicos, mantenimiento de edificios públicos...).

Actualmente los servicios sociales están prácticamente privatizados. Se ha cedido a las empresas privadas y pseudo-ONG el negocio de la pobreza, generando una situación de lucro a expensas de las personas pobres.

madora que no les corresponde a las ONG, que tratan, en tanto esperan la intervención política, de minimizar los riesgos de la pobreza con el asistencialismo, pero temporalmente, en espera de las acciones políticas que no han llegado ni a las chabolas de Huelva ni a las calles de Sevilla. Han estado imposibles ante el empeoramiento de las condiciones de vida de los temporeros y personas sin hogar.

¿Cuál ha sido la relación de La

gir la resolución de la marginalidad, exclusión y vulnerabilidad detectada.

Si las ONG se convierten en una mera salida laboral para unos cuantos o un club social en lugar de un centro de denuncia y activismo, flaco favor le hacen a la causa para la que se fundaron.

Por todo ello, nosotros desparecemos reconociendo nuestro fracaso.



Nuestro proyecto de autogestión, inclusivo y de proximidad, poco apoyo puede esperar de las tres administraciones permisivas con el negocio de la pobreza. Las administraciones deberían ser el motor de transformación de esta bola de pobreza y acabar con la constante violación de los Derechos Humanos. Tarea transfor-

Carpa con las ONG que actúan en este terreno?

En España hay 350.000 ONG a las que el Estado dedica 18.000 millones de euros anuales. El objetivo de cualquier ONG debería ser el de desaparecer. Se entiende que se inscriben para llegar a donde el Estado y las administraciones no llegan, pero, a la vez, deberían exi-

¿Cómo continuar con la lucha por el derecho a techo?

A nivel individual seguiremos colaborando con las más de 40 entidades con las que estos años hemos luchado por los derechos humanos...en las calles!

Entrevista realizada por Luis González para Información Obrera

Mamdami elegido alcalde de Nueva York – Declaración de la DSA

Declaración emitida por la organización estadounidense Democratic Socialists of America (DSA) el 4 de noviembre tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York.

La victoria del socialista demócrata Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York es una victoria para la clase trabajadora. Los neoyorquinos han logrado la victoria electoral más monumental del movimiento socialista estadounidense en el último siglo, a pesar de los millones de dólares invertidos para impedirlo.

En la actualidad, los multimillonarios tienen más dinero que nunca. El resto de nosotros tenemos dificultades para llegar a fin de mes. Y la clase política se encarga de que siga siendo así. La campaña de Zohran prometió una alternativa: una ciudad que funcione para los trabajadores.

Gracias a la victoria de Zohran, el pueblo ha derrotado a la oligarquía; la clase trabajadora ha derrotado a las grandes empresas; el socialismo democrático ha derrotado al statu quo del Partido Demócrata. Este movimiento ha sido impulsado por más de 99 000 voluntarios y millones de votantes.

Miles de miembros de la DSA en Nueva York han desempeñado un papel fundamental en la campaña como personal y voluntarios: han llamado a las puertas, han llamado a

los votantes, han hablado con sus compañeros de trabajo y han organizado acciones en nuestros sindicatos

son populares y que las personas organizadas pueden vencer el poder del dinero. Zohran no ha tenido miedo

ser libre y que Estados Unidos no debe ser cómplice del genocidio perpetrado por Israel.

Nuestro movimiento ha obtenido una victoria decisiva, pero las verdaderas luchas no han hecho más que empezar. Los ricos y poderosos se opondrán en todo momento a la DSA y a Zohran, y ya hemos visto que no dudarán en recurrir a la islamofobia y al racismo más burdo para conseguirlo.

Solo conseguiremos las reivindicaciones de esta campaña si construimos un movimiento de masas compuesto por personas corrientes de la clase trabajadora para derrotar a los políticos corruptos del establecimiento.

Estamos deseando luchar junto al alcalde Mamdani para conseguir una congelación de los alquileres, autobuses rápidos y gratuitos y una guardería universal.

Seguiremos luchando por una Palestina libre, por sacar a la ICE de nuestras ciudades, por encontrar alternativas a la policía que garantizan realmente la seguridad de las comunidades y por resistir los ataques de Donald Trump contra nues

tos servicios sociales.

La DSA seguirá apoyando a los socialistas demócratas que se presentan a las elecciones en todo Estados Unidos, mientras construimos un movimiento político surgido de la clase trabajadora y al servicio de esta, capaz de derrotar a la oligarquía y ganar la revolución política. Los socialistas no se conforman con ganar y disputar las elecciones en Nueva York.

Este año hemos apoyado a 18 candidatos de la DSA de más de 11 secciones de todo el país que se presentaban a las elecciones locales. Nuestra comisión electoral nacional también ha lanzado una campaña nacional de recaudación de fondos, titulada «Socialist Cash Takes Out Capitalist Trash» (El dinero socialista elimina la basura capitalista), con el fin de apoyar a nuestra lista de candidatos aprobados a nivel nacional, y recaudó 100 000 dólares en solo 7 meses.

Esta noche, la DSA de Nueva York y Zohran han demostrado que un mundo mejor es posible. Únete a la DSA para ayudarnos a construirlo.

Declaración de la DSA



y comunidades.

Estas elecciones demuestran que las ideas socialistas democráticas

de decir con valentía lo que piensan sus votantes y la mayoría de los estadounidenses: que Palestina debe

Plan Trump, continuidad del genocidio

(Informaciones recogidas por Informations ouvrières n.º 883)

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el mes pasado, al menos 236 palestinos han muerto en ataques israelíes y otros 600 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí continúa construyendo una «línea amarilla» destinada a reforzar el control del territorio, cuyo cruce está estrictamente prohibido, incluso a los palestinos que intentan regresar a sus hogares.

El plan de Trump se está poniendo en marcha gradualmente. La base estadounidense, que acaba de instalarse en el sur del desierto del Néguev para supervisar las acciones del ejército israelí en Gaza y observar toda la región, marca la evolución de las relaciones entre Estados Unidos, bajo el impulso de Trump, y el Gobierno israelí.

Según la agencia Axios, un documento oficial estadounidense enviado a varios miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presenta un proyecto de resolución destinado a crear una fuerza internacional en

Gaza para garantizar la «seguridad» del territorio hasta finales de 2027.

La fuerza internacional se encargará de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto y de proteger a los civiles y los corredores humanitarios, es decir, gestionar de manera humanitaria los bantustanes en los que se recluirá a los palestinos de Gaza, presagianando sin duda la forma de confinamiento concentrado que el ministro Smotrich pretende instaurar en Cisjordania.

Altos responsables estadounidenses declaran que desean desplegar los primeros soldados de la fuerza en Gaza en enero.

En esta etapa, el Gobierno israelí pretende elegir los países que integrarán esta fuerza internacional, una de cuyas misiones será la formación de una fuerza policial palestina que debería actuar como la de la Autoridad Palestina, es decir, como un celoso aliado sobre el terreno del ejército genocida israelí.

Tortura sistemática de los presos palestinos en las cárceles israelíes

Los malos tratos, la tortura y las privaciones (alimentarias, médicas, visitas familiares) están ampliamente documentados: numerosos testimonios hablan de celdas superpobladas, palizas, reducción drástica de las raciones de comida y ausencia casi total de atención médica (este es el destino que sufre, en particular, el doctor Abu Safiya, golpeado regularmente por sus carceleros). Desde el comienzo de la guerra en Gaza, al menos 80 detenidos han muerto bajo tortura o como consecuencia de las condiciones insalubres. Los cadáveres de los detenidos palestinos repatriados a Gaza presentan sistemáticamente signos de mutilaciones, con los ojos vendados y las manos atadas, lo que sugiere un trato especialmente cruel y actos que pueden llegar a la muerte por tortura. Cerca de 9000 presos palestinos se encuentran que se aplica también a menores y mujeres. Se ha suspendido el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a los abogados, mientras que se han denunciado desapariciones forzadas, en particular entre los habitantes de Gaza trasladados a campos militares israelíes. Orly Noy, directora de la asociación B'Tselem, afirma que no hay ningún juez, ningún responsable israelí, «ni un solo elemento de este sistema que no supiera lo que estaban haciendo —incluso hoy, en este momento— a los detenidos y prisioneros palestinos».

Violencia colonial todos los días en Cisjordania

Información recopilada en solo 48 horas, a finales de la semana pasada, en los canales de noticias palestinos de Telegram:

* Los ataques de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania ocupada siguen intensificándose, dirigiéndose contra los agricultores y sus tierras.

* Las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron a los hermanos Yousef, Mohammed y Ahmed Ziyad Nazzal, así como a Ahmed Abu al-Qasim Sab'a aneh, tras registrar sus domicilios en Qabatia, cerca de Jenín, en Cisjordania ocupada.

* Las fuerzas de ocupación israelíes, acompañadas por grupos de colonos, expulsan por la fuerza a los agricultores palestinos de sus olivares en la aldea de Burin, al sur de Nablus.

* Colonos israelíes pastan su ganado en tierras palestinas en Masafer Yatta, al sur de Hebrón, así como cerca de la ciudad de Sa'ir, al este de Hebrón, una táctica cada vez más utilizada para apoderarse progresivamente de las tierras con el pretexto del pastoreo.

* Imágenes de actos de barbarie contra animales, captadas por cámaras de vigilancia, muestran a un grupo de colonos israelíes asaltando un recinto ganadero cerca de la ciudad de As-Samu, al sur de Hebrón, y matando brutalmente a varios animales con ba-

* Los colonos siguen acondicionando y controlando el manantial de al-Hamma, en el norte del valle del Jordán, privando así a varias comunidades beduinas de su única fuente de agua.

* El Club de Prisioneros Palestinos informa de que las fuerzas de ocupación han detenido al menos a diez palestinos en redadas llevadas a cabo en Cisjordania en las últimas horas.

Breves

Según Unicef, los niños de Gaza se enfrentan a un «sufriimiento inmanejable». Israel solo ha autorizado una parte de los envíos de ayuda acondicionados en el marco del alto el fuego negociado por Estados Unidos, es decir, solo el 24% de los 600 camiones que se supone que deben entrar diariamente en Gaza. La portavoz de Unicef, Tess Ingram, advirtió que más de un millón de niños en Gaza viven en condiciones desesperadas, con una escasez creciente de alimentos y agua potable a pesar del alto el fuego declarado el 10 de octubre.

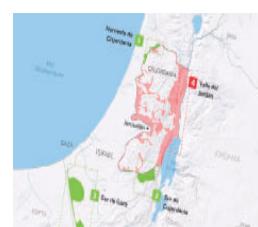
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, declaró ante la Asamblea General que más de 60 países son cómplices del genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Identificó a Estados Unidos como el pilar de la economía de guerra israelí, responsable de dos tercios de sus importaciones de armas y cuyos repetidos vetos en el Consejo de Seguridad han permitido a Tel Aviv ejercer toda responsabilidad. Alemania, el Reino Unido y otros Estados europeos han sido cuestionados por continuar con sus ventas de armas «a pesar de la acumulación de pruebas de genocidio».

Criticó a los Estados árabes que han normalizado sus relaciones con Tel Aviv mientras Gaza era presa de las llamas.

François Laza



Colonos ocupando territorio en Cisjordania



tras de hierro.

* La Comisión Palestina de Resistencia a los Asentamientos y al Muro informa de que las fuerzas de ocupación israelíes y los colonos han perpetrado 259 ataques contra palestinos durante la actual temporada de recolección de aceitunas.

10.000 soldados estadounidenses en el Caribe

(Leído en *Informations ouvrières* n.º 883)

Mientras el presidente estadounidense acaba de amenazar a Nigeria con una intervención militar con el pretexto de la lucha por la libertad religiosa, continúan los preparativos militares frente a las costas de Venezuela y Colombia, con la complicidad de algunos gobiernos de la región, como el de Trinidad y Tobago, que acoge buques estadounidenses, o el de Ecuador, cuyo presidente Noboa ha propuesto acoger bases estadounidenses.

Las operaciones llevadas a cabo por cazas estadounidenses, sus sobrevuelos de las costas en el límite de las aguas internacionales, así como el despliegue de buques de guerra y el envío de unos diez mil soldados al Caribe, constituyen una amenaza de agresión e intervención militar contra Venezuela, y ahora también contra Colombia. Representan una intimidación contra la soberanía de todos los países de América Latina, lo que exige una respuesta coordinada y común.

Desde el 2 de septiembre, fecha del primer bombardeo aéreo, doce embarcaciones acusadas de tráfico de drogas —sin pruebas— ya han sido hundidas, matando al menos a sesenta y dos «narcoterroristas», según las autoridades estadounidenses.



La ONU condenó esta semana lo que calificó de «ejecuciones extrajudiciales», instando a Trump a poner fin a ellas.

Pero, al igual que con las múltiples resoluciones sobre Gaza, Estados Unidos hace oídos sordos. Los aliados serviles aprueban. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la instalación de bases militares estadounidenses en el santuario ecológico de las islas Galápagos, con el pretexto de luchar contra el tráfico en la región. Esta insta-

nidense en el mar del Caribe, que Caracas describe como una amenaza destinada a provocar un «cambio de régimen». El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de utilizar su campaña militar antidroga como pretexto para una invasión, con el objetivo de tomar el control del petróleo latinoamericano.

En Brasil, unos días antes de la masacre de Río, donde Claudio Castro había hablado, sin pruebas, de «narcoterrorismo», el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente, compartió una publicación del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre el ataque a una embarcación de una organización terrorista en el Pacífico. Traidor a la patria, Flávio sugirió que Hegseth «viniera a ayudar» a Brasil en la lucha contra el tráfico en la bahía de Guanabara, en Río.

Por su parte, Lula, en vísperas de su reunión oficial con Trump en Malasia, declaró claramente: «No se dice que se va a matar a la gente. Hay que detener a las personas, juzgarlas, saber si trafican o no, y luego castigarlas según la ley».

Criticando a Trump, añadió: «Es lo mínimo que se espera de un jefe de

Estado. Sería mucho más útil que Estados Unidos dialogara con las policías y los Ministerios de Justicia de otros países para actuar juntos. Porque si esta moda se impone y cada uno se cree autorizado a invadir el territorio del otro para hacer lo que quiera, ¿qué quedará de la noción misma de respeto a la soberanía de las naciones?».

Según la información disponible, el tema finalmente no se abordó durante la reunión.

La cuestión esencial: el respeto a la soberanía de las naciones

Esa es la verdadera cuestión: el respeto a la soberanía nacional. Trump no es un emperador, ni siquiera en Estados Unidos, como han expresado los siete millones de estadounidenses que salieron a la calle para manifestarse. El pueblo de Estados Unidos y las naciones de América Latina tienen, esta vez, una causa común. Esta causa concierne en primer lugar a Lula, Maduro, Petro, Boric y Sheinbaum: la

victoria de una nación será la victoria de todas.

Markus Sokol,

Diálogo y Acción Petista (DAP)

Brasil - La intervención policial más mortífera de la historia del país: 121 muertos en Río de Janeiro

El 28 de octubre, una intervención policial en barrios de la periferia de Río de Janeiro provocó la muerte de 121 personas. Se produjeron manifestaciones en todo el país, especialmente el 31 de octubre, en las que se acusó directamente al gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, calificado de «asesino», se exigió el fin de las masacres cometidas por la Policía y se pidió que la investigación se llevara a

traficantes contraatacaron bloqueando varias arterias principales [...] y provocando la parálisis de la ciudad, sumida en el miedo y la inseguridad.

A día de hoy, los habitantes siguen recogiendo y contando nuevos cadáveres, lo que eleva a más de 120 el número de muertos, en su mayoría jóvenes. [...]

A pesar de toda esta violencia, la criminalidad no se ha combatido, sino que

sumarias, obstáculos a los socorros, intimidaciones, habitantes encerrados en sus casas. [...]

Para él, la operación fue una victoria; para las familias de las víctimas y los habitantes, nada cambiará, ya que los responsables de las masacres anteiores siguen impunes.

Este es el legado de un Estado y unas instituciones degeneradas, incapaces de

garantizar las condiciones de vida y seguridad de su población. [...]

Son los mismos que exaltan la ejecución de los pobres en las favelas, los mismos que invierten fondos públicos en la compra de armas, en detrimento de los servicios públicos que contribuyen a reducir y deteriorar.

La respuesta a la violencia y la criminalidad debe provenir de una verdadera política de Estado, basada en métodos científicos de investigación criminal, asociados a la desmilitarización de la policía y a políticas públicas que devuelvan estos territorios al pueblo, en particular a la juventud negra, principal víctima de estas operaciones policiales.

Por último, hoy en día es esencial establecer las responsabilidades de esta masacre, planificada y premeditada, según las propias palabras del gobernador, ya que se trata de su política de seguridad pública.

Esta investigación solo podrá ser imparcial si las investigaciones sobre las masacres de Alemao y Penha se llevan a cabo a nivel federal.

(1) Los complejos son conjuntos de favelas.

(2) El expresidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado a veinticinco años de prisión por intento de golpe de Estado, es presidente de honor del Partido Liberal.

«¡Venid a Londres en junio!»



Extractos de la intervención de John Rees (Stop the War) en el Mítin Internacional contra la Guerra del 5 de octubre en París

«El próximo miércoles (11 de octubre, nota del editor), organizaremos nuestra trigésima segunda manifestación nacional en solidaridad con Palestina. Esperamos a cientos de miles de personas en las calles de Londres, como ha sido el caso en todas las manifestaciones anteriores. [...] Mis compañeros italianos tienen razón al decir que los avances esenciales vendrán de la clase obrera, la clase trabajadora, que está en primera línea, y ahí está el cambio decisivo: el internacionalismo debe existir. [...]»

Solo tengo un país, mi país es la clase obrera, ¿dóndequiera que esté! Mi misión es el internacionalismo porque, cuando se habla de chovinismo, yo hablo de internacionalismo, cuando se habla de patriotismo, yo hablo de internacionalismo. [...] Hay que darse prisa porque el tiempo

apremia.

Nos queda poco tiempo. Os invito a volver al segundo congreso de este movimiento en Londres el año que viene, ya hemos reservado un lugar y les diré dónde se encuentra: Central Hall en Westminster (...), frente a la casa de Keir Starmer para transmitir el mensaje: la guerra no es la política de la clase obrera. Así que venid a Londres,



En Penha 50 de los cadáveres fueron recuperados al día siguiente

cabo a nivel federal y no local. Publicamos extractos de las publicaciones de Diálogo y Acción Petista (DAP), que participó activamente en las manifestaciones.

El día 28, una megaoperación en la que participaron 2.500 policías civiles y militares con el objetivo de detener a los cabecillas del tráfico de drogas saudió los complejos de Alemao y Penha¹, en la zona norte de Río de Janeiro. En un clima de guerra, la población local se vio una vez más atrapada en una trampa. En respuesta, los

sigue creciendo. Controla los territorios y somete a sus habitantes. [...]

El tráfico nunca ha dejado de funcionar en la región, reforzándose como cuartel general de la facción criminal, negociando con policías corruptos, a pesar de las frecuentes operaciones llevadas a cabo en el lugar.

El gobernador Claudio Castro (Partido Liberal)², durante la operación policial más mortífera de la historia, llevó a cabo una masacre, utilizando a la policía para exterminar, en un auténtico escenario de guerra: ejecuciones

sumarias, obstáculos a los socorros, intimidaciones, habitantes encerrados en sus casas. [...]

Para él, la operación fue una victoria; para las familias de las víctimas y los habitantes, nada cambiará, ya que los responsables de las masacres anteiores siguen impunes.

Este es el legado de un Estado y unas instituciones degeneradas, incapaces de

Me abono a
INFORMACIÓN OBRERA

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: POBLACIÓN:

TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/ CORRIENTE A NOMBRE DE MANUEL CUSO - LA CAIXA ES83 2100 2865 5813 0063 0460

6 NÚMEROS: 9 €

12 NÚMEROS: 18 €

24 NÚMEROS: 36 €

PDF, 24 NÚMEROS: 15 €



www.informacionobrera.org